



**LA IA
CONQUISTA
EL PUEBLO**

En la imagen, Adrián Alonso, vecino de la localidad de Monfarracinos (Zamora), frente a la zona donde está proyectado el centro de datos y la central térmica del cual es reacio. Una de sus máximas preocupaciones es que el pueblo se divida totalmente y afecte a la convivencia con los vecinos.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ /
ARABA PRESS

Por
Alfonso
Aparicio

Entre Monfarracinos y Molacillos, en plena comarca de la Tierra del Pan (Zamora), se plantea el *Data Center Hiperescalor LA Zamora*, un megaproyecto saudí-francés que suma un centro de datos, una planta fotovoltaica de 1.000 hectáreas y una central térmica de casi 30 motores. Un gran complejo situado en una de las tierras más fértiles de la provincia y que, como cuenta *Crónica* Adrián Alonso, vecino de la localidad, ha caído sobre el pueblo en pleno agosto y casi sin ruido.

La iniciativa se emplaza en el polígono industrial de este municipio de apenas 1.000 habitantes y que se sitúa a ocho kilómetros de Zamora capital. Las multinacionales que están detrás de esta gran construcción son FRV-X Renewable SLU, plataforma tecnológica de FRV,

perteneciente al grupo privado saudí Abdul Latif Jameel, y Edison Next Spain SLU, filial del grupo energético público francés EDF. A falta de un comprador.

La ubicación del proyecto no es baladí: Zamora lidera año a año los rankings de provincias que más habitantes pierden y más dificultad encuentran para fijar población. Cada proyecto industrial es un pequeño milagro. Y uno de estas características, como explica Armando Layna, uno de los socios fundadores de Digital Valley, se instala con muchas necesidades: «Se necesitan electricistas, fontaneros, soldadores, ingenieros, arquitectos...primero el centro de datos hay que construirlo y luego hay que operarlo». Infraestructuras de esta clase, afirma, «son capaces de generar un ecosistema de más de 250 empresas a su alrededor».

¿Entonces, de dónde viene la contestación?

La principal queja, común a otros proyectos, es que en todo este procedimiento las noticias han llegado de manera repentina al municipio, con «la gente de vacaciones sin enterarse de nada», asegura el vecino Adrián, totalmente en contra de la construcción. El expediente del proyecto salió publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 5 de agosto, en pleno periodo estival. «A mí no me ha dado tiempo ni a hablar con los vecinos», destaca.

El plazo para las alegaciones legales se acaba este 16 de septiembre y Adrián describe, más que una oposición organizada, un pueblo que aún no sabe del todo qué le van a poner al lado. «El alcalde está intentando recabar toda la información, se está asesorando con abogados y con ingenieros, porque quiere dar infor-

mación al pueblo y lo está haciendo bien», explica. «Lo que a mí me preocupa es que esto divida un poco al pueblo, en cuanto a la convivencia. Hay gente a favor y hay gente en contra», detalla.

Sin apenas información en el informe del proyecto sobre el impacto económico que dejaría la iniciativa en las arcas del Consistorio, Alonso resalta su gran negativa: «El precio que tenemos que pagar el pueblo y la comarca es muy elevado para luego no recibir nada a cambio. Si me dicen que como contrapartida, el ayuntamiento va a recibir cinco millones de euros al año...ahí sí estaría de acuerdo». Las quejas van por el consumo de agua, la afectación sobre el paisaje, sobre la fauna de la zona...

Nadie da cifras oficialmente, pero fuentes conocedoras del proyecto, consultadas por *Crónica*, aseguran que sólo en impuestos y tasas medioam-

bientales y urbanísticas, este proyecto, uno de los más importantes en toda Castilla y León, multiplicaría por cuatro el presupuesto municipal de Monfarracinos, estimado en 600.000 euros.

El *Data Center Hiperescalar* *IA Zamora* consta de cinco edificios —el centro de datos in-

tregro— de dos plantas sobre 33 hectáreas del polígono industrial Zamora Norte, con 200 megavatios de potencia informática. Al lado, una central de generación propia con 24 motores duales de gas más grupos diésel de emergencia. Y a 15 kilómetros, en Villalube y Asparriegos, una planta fotovoltaica de 1.625 megavatios pico que ocuparía 977 hectáreas valladas. En total, una superficie de 1.366,12 hectáreas que han tenido un proceso de compra y venta «poco transparente», según denuncian sus críticos.

Los terrenos donde se levantará el megaproyecto pertenecían a agricultores de la comarca. Hace unos dos años, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, a través de Somacyl, la sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente de la comunidad, mantuvo dos reuniones con los propietarios de las parcelas. Un agricultor que asistió a la se-



Los campos que no quieren nubes (de datos)

En Zamora, la provincia que más población pierde de España, sobre Monfarracinos ha caído una noticia importante: un gran centro de datos con capital saudí y francés. Mientras unos ven en él un pequeño milagro industrial y otros un precio demasiado alto para el pueblo, las grandes tecnológicas ya han desplegado su mapa: 37 proyectos se dibujan en la España vaciada con el nuevo decreto ley del Gobierno amenazando al sector

gunda, y que pide a *Crónica* mantener el anonimato, asegura que al principio «hubo ciertas coacciones y presiones». En la primera reunión se apalabró un precio: 3,5 euros el metro cuadrado de secano y 5 el de regadío aproximadamente. En la segunda, según otro agricultor contactado por *Crónica*, se llegó a decir que se «iban a expropiar las tierras» si no firmaban todos. Ambos aseguran que el alcalde, del PP, tuvo que mediar con los representantes de Somacyl para que pagaran lo apalabrado en la primera reunión. Al final, todo se solucionó. Fuentes de la Junta de Castilla y León explican a este suplemento que, al tratarse de una zona de interés regional, la ley habilita a la Administración a declarar la utilidad pública o el interés social del proyecto, lo que legitima la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para ejecutarlo.

Más allá de Monfarracinos, el proyecto prevé una línea de evacuación subterránea de 220 kilovoltios y 15.257 metros de trazado, algo más de 15 kilómetros, que cruza varios términos municipales para conectar el centro de datos y la planta fotovoltaica. Solo en Molacillos, el pueblo vecino, la relación de parcelas afectadas incluye 57 parcelas por las que pasará la zanja, en tramos que van de apenas tres metros a más de 600. El impacto existe. Sobre esto, Pedro Pablo Ballesteros, presidente del canal Toro-Zamora, infraestructura hidráulica destinada al regadío que discurre por las provincias de Valladolid y Zamora, relata a *Crónica* que los tiempos para las alegaciones son muy cortos y falta información pública para saber por dónde va a discurrir esa línea y a qué parcelas van a afectar. Según las alegaciones que

han elaborado y a las que ha tenido acceso este suplemento, la comunidad de regantes asegura que «la ausencia de esta información dificulta que los titulares puedan conocer el alcance real de la afección sobre sus fincas y valorar adecuadamente sus consecuencias agrícolas, patrimoniales y económicas». **LA ESPAÑA (NO) VACIADA DE PROYECTOS** Monfarracinos no es una excepción. *Crónica* ha contabilizado un total de 37 proyectos de centros de datos en distintas fases de tramitación de licencias urbanísticas y medioambientales repartidos por la España vaciada. Aunque Aragón es bien conocida por liderar este sector, las nuevas iniciativas se concentran también en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las empresas multinacionales y los fondos de inversión

han puesto los ojos en municipios pequeños, pero que ofrecen disponibilidad de suelo y oportunidades para revitalizar antiguas infraestructuras de energía. En Valdecaballeros, situado en la Siberia extremeña y con tan sólo 1.036 habitantes, la socimi Merlin Properties—la mayor compañía inmobiliaria de la península ibérica cotizada en el Ibex 35—y la estadounidense *Edged Energy* aspiran a levantar diez edificios y un gigavatio de capacidad sobre los terrenos de una central nuclear que nunca llegó a funcionar. Merlin maneja una previsión de inversión de unos 20.000 millones de euros a diez años entre este campus y el de Navalморal de la Mata, aunque todavía no se trata de un compromiso en firme. Amazon, que ha comprometido 33.700 millones de euros en Aragón, proyecta doce edificios y cinco subestaciones sobre 328 hectáreas entre La Puebla de Híjar y Azaila, en el Bajo Martín turolense. Se repartirán entre La Puebla de Híjar (935 habitantes) y Azaila (94). En Calatorao, un municipio de 2.970 vecinos en plena comarca del Valdejalón (Aragón), el fondo estadounidense Blackstone—el mayor gigante financiero de Wall Street—promueve el *Proyecto Rhodes* a través de la sociedad Calanza Inmuebles y de su operadora QTS. Son 11.805 millones de euros, la mayor cifra anunciada para un solo campus en la España vaciada, repartidos en ocho edificios junto a la A-2. La operación evidencia un cambio de paradigma histórico en la economía global: los gigantes de la Inteligencia Artificial y la Nube ya no buscan grandes metrópolis para sus inversiones, sino vastas extensiones de suelo, potentes nudos de conexión de alta tensión e infraestructuras de energía renovables para alimentar sus superordenadores. La estadounidense EdgeMode, que cotiza en el mercado extrabursátil, y su socia Blackberry AIF, han planteado diferentes proyectos que se reparten principalmente por diferentes comarcas de Castilla-La Mancha hasta el Valle de los Pedroches, en Andalucía. Solo en la construcción de Mora (Toledo) se habla de cerca de 3.000 millones de inversión, 5.500 empleos en obra y un millar estables. Amazon, Blackstone, MERLIN Properties, EdgeConneX, Microsoft, ACS... Decenas de gigantes corporativos han puesto el foco en España, un país que se está consolidando como el *hub* de *data centers* del sur de Europa gracias a sus

condiciones estratégicas.

ESPAÑA EN EL PUNTO DE MIRA

Este interés por parte de las grandes empresas multinacionales y los fondos de inversión se debe, en gran parte, a tres factores: la abundancia de energías renovables gracias a la posición geográfica de España con la energía solar y eólica; la gran conectividad, ya que es el punto de entrada de diferentes cables submarinos que conectan África con el continente europeo así como el punto más cercano al continente americano; y la infraestructura fija de banda ancha de la península ibérica, que supera el 90% del territorio, a diferencia de la media europea que no llega a alcanzar el 75%. La visión de Layna es clara: «España es seleccionada por las grandes nubes para ser el *hub* del sur de Europa al reunir todos los ingredientes suficientes para desarrollar estas infraestructuras del sector». Ciertamente es que, dentro de todo este sector que se ha desarrollado más a fondo en los últimos 15-20 años, «los centros de datos han ido reduciendo su huella de CO2 y creando un circuito de agua cerrada para la climatización donde, una vez que llenas el anillo de agua para su uso industrial, si no se rompe ya no tienes que volver a llenarlo». **EL DECRETO QUE LO AMENAZA TODO** Sin embargo, estas últimas semanas ha salido a la palestra un gran hándicap: el decreto ley que anunció el gobierno de Pedro Sánchez el pasado 26 de agosto, que altera las reglas del juego y ha puesto en contra a gran parte del sector. Los afectados denuncian que supondría un gran paso atrás para toda la industria de los *data centers* y paralizaría tanto proyectos en desarrollo como algunos ya en funcionamiento. Los elevados umbrales de eficiencia exigidos por el texto obligan a estas instalaciones a operar bajo restricciones técnicas extremas. Se les exige que al menos el 80% de su electricidad proceda de nuevas fuentes renovables en una correspondencia «hora a hora», así como unos niveles máximos de eficiencia energética con un indicador PUE de 1,15 que resultan inalcanzables para muchas plantas actuales. El PUE es la diferencia que hay entre la energía que consumen todos los ordenadores del centro de datos y la energía que consumen todas las máquinas de climatización para que dichos ordenadores trabajen de forma óptima.

Los centros de datos en España han registrado tradicionalmente ratios de PUE superiores al 1,5. Y las restricciones del nuevo decreto son tan altas que, como informó EL MUNDO esta semana, incluso el proyecto estrella del propio Gobierno, una gigafactoría con una inversión pública comprometida de más de 1.000 millones de euros, tendría que readaptarse porque supera el límite de 1,15. En el sector privado las instalaciones avanzan hacia estándares de máxima eficiencia, hasta el punto de que grandes tecnológicas

España es el quinto país del mundo que mejor está hiperconectado y se le cataloga como estratégico en cables submarinos

Crónica ha contabilizado un total de 37 proyectos de centros de datos en la España vaciada con empresas internacionales

Amazon, Microsoft, Meta, Blackstone, Google o ACS son algunas de las grandes empresas interesadas en España

Con el decreto ley, el 80% de los proyectos planificados en España se cancelarían, afectando a los actuales también

Para el vecino de Monfarracinos, “esto no es progreso porque no afianza población y crea pocos puestos de trabajo”

como Amazon, Microsoft o Google cuentan ya con infraestructuras que logran situarse por debajo del 1,05. Las quejas de la industria son generalizadas. Begoña Villacís, ex dirigente de Ciudadanos y actualmente directora ejecutiva de Spain DC, alerta a *Crónica* de los efectos de la nueva regulación si sale adelante: «No va a haber nadie que quiera invertir en el país que va a tener la norma más restrictiva de Europa y una de las peores del mundo».